

Expediente 06/2022-REV-CG

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a catorce de septiembre de dos mil veintidós¹, la que suscribe licenciada Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato², **doy cuenta** al Consejo General de este *Instituto*, con lo siguiente:

ÚNICO. Escrito firmado por José Manuel Aguilar Jasso, recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto, mediante el cual interpone recurso de revocación en contra del acuerdo CGIEEG/036/2022, emitido por el Consejo General del *Instituto* en la sesión ordinaria del treinta y uno de agosto.

Vista la cuenta que antecede, **se provee:**

I. Radicación y registro. Radíquese el recurso promovido y regístrese con el número de expediente **06/2022-REV-CG** en el libro de registro respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 392 de la *Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato*³ y 121 del *Reglamento de sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato*⁴.

II. Integración de constancias. Se ordena incorporar el escrito referido en la cuenta, así como sus anexos, al expediente en que se actúa.

III. Competencia. El Consejo General del *Instituto* es competente para pronunciarse respecto a la admisión o desechamiento del recurso de revocación que nos ocupa, atento a lo dispuesto por los artículos 392 y 394 de la *ley electoral local* y 121 del *Reglamento de sesiones*.

IV. Improcedencia. Los artículos 1 y 17 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, así como el artículo 25 de la *Convención Americana sobre Derechos Humanos*, reconocen el derecho de acceso a la justicia; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tal derecho no es absoluto, pues «no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance»⁵. En otras palabras, al interponerse un medio de impugnación deben cumplirse los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia que le resulten aplicables conforme a la ley que lo rigen.

¹ Las fechas a las que se hace referencia corresponden al año que transcurre salvo manifestación en contrario.

² En adelante *Instituto*.

³ En lo sucesivo *ley electoral local*.

⁴ En lo subsecuente *Reglamento de sesiones*.

⁵ Jurisprudencia de rubro: DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Libro 11, Octubre de 2014 Tomo I. Tesis: 2a./J. 98/2014 (10a.). Página: 909.

Robustece lo expuesto, el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido mediante jurisprudencia que el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción es perfectamente compatible con que el Poder Legislativo regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse.⁶

En este contexto, el artículo 392 de la *ley electoral local* establece que el recurso de revocación es procedente contra actos o resoluciones del Consejo General del *Instituto Electoral* que no tengan previsto otro medio de impugnación en la ley en comento.

De lo anterior se colige que, en tanto no exista un medio de defensa específico para impugnar algún acto o resolución del Consejo General de este Instituto, la inconformidad debe deducirse mediante la interposición del recurso de revocación.

Por consiguiente, es menester revisar si de acuerdo a su naturaleza, el acto impugnado, es susceptible de combatirse a través del recurso en mención.

Ahora bien, del contenido del escrito mediante el cual el ciudadano José Manuel Aguilar Jasso, promueve el recurso de revocación que nos ocupa, se advierte que la impugnación y, por consiguiente, la expresión de agravios, combate lo determinado en el acuerdo **CGIEEG/036/2022**, aprobado el treinta y uno de agosto por el Consejo General de este *Instituto*, a través del cual se da respuesta al escrito de solicitud presentado por Óscar Edmundo Aguayo Arredondo y José Manuel Aguilar Jasso, para el registro de “Corrijamos el Rumbo” como agrupación política local.

En el apartado de agravios, la parte actora refiere que con la emisión del acuerdo la autoridad responsable propició una violación al artículo 9 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* que consagra el derecho de asociación, ya que el Consejo General de este *Instituto* carece de facultades para analizar las violaciones antes referidas, dado que, la hipótesis normativa se encuentra prevista en la fracción XI, del artículo 389, de la *ley electoral local* que dispone que el juicio de la ciudadanía es procedente cuando un ciudadano considere que un acto o resolución de la autoridad electoral violenta sus derechos político-electorales:

«Artículo 389. El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos guanajuatenses con interés jurídico, en los casos siguientes:

[...]

XI. Cuando considere que un acto o resolución de la autoridad electoral es violatorio de cualquier otro de sus derechos político-electorales.»

Lo anterior, se robustece con las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que se determina que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

⁶ Jurisprudencia de rubro: DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. Primera Sala. Décima Época. Tesis: 1a./J. 90/2017 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48. Noviembre de 2017. Tomo I. Página 213.

procede cuando se aduzcan violaciones a diversos derechos fundamentales vinculados con el derecho de asociación, mismas que son del rubro siguiente:

«**Jurisprudencia 2/2000.** Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Requisitos para su procedencia.

Jurisprudencia 36/2002. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Procede cuando se aduzcan violaciones a diversos derechos fundamentales vinculados con los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación.

Jurisprudencia 31/2012. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Compete a la Sala Superior conocer de omisiones que vulneren el derecho de asociación.»

En este sentido el artículo 35, fracción III, de nuestra ley fundamental, reconoce como derecho político el de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

Asimismo, existen derechos fundamentales que en su ejercicio pueden tener una orientación político-electoral, como es el derecho de reunión en el ámbito político-electoral, consagrado también en el artículo 9 de la Constitución Política Federal.

En virtud de lo anterior, en la jurisprudencia 36/2002 se precisó que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano debe considerarse procedente no sólo cuando directamente se hagan valer presuntas violaciones a cualquiera de los derechos políticos electorales: de votar y ser votado en las elecciones populares; de asociarse individual y libremente para tomar parte de forma pacífica en los asuntos políticos del país, y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; si no también, cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos, como podrían ser los derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales, garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, este Consejo General considera que la vía idónea para inconformarse contra el acuerdo CGIEEG/036/2022, es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; toda vez que del contenido del medio impugnación presentado ante este Instituto se aducen violaciones al derecho político-electoral de asociación relacionado con el registro de una agrupación política local.

De manera que, en la especie, no se actualiza el supuesto de procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 392 de la *ley electoral local*, pues, aunque el acto impugnado fue emitido por el Consejo General de este Instituto, sí tiene previsto un medio de impugnación específico, como es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y, por ende, no se surte el supuesto jurídico previsto en el precepto citado.

En suma, al ser notoria la improcedencia del recurso de revocación interpuesto por José Manuel Aguilar Jasso, este Consejo General debe ajustar su actuación al principio de legalidad previsto en los artículos 16 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* y 2 de la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato*, el cual incluso es rector del ejercicio de la función electoral en términos del artículo 77 de la *ley electoral local*; por lo que este órgano colegiado está imposibilitado para ampliar los supuestos de procedencia del recurso de revocación, máxime que conforme a lo razonado en líneas arriba, existe un medio de impugnación a través del cual es posible combatir el contenido del acuerdo CGIEEG/036/2022.

V. Remisión del escrito de expresión de agravios y las pruebas documentales ofrecidas al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. No obstante que, como se señaló con antelación, el recurso de revocación es improcedente en contra del acuerdo CGIEEG/036/2022 del treinta y uno de agosto, de conformidad con el artículo 389, fracción XI, de la *ley electoral local*, a consideración de este Consejo General, tal acto es susceptible de combatirse a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuyo conocimiento y resolución corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, tal como dispone el artículo 391 de la misma ley.

En consecuencia, en aras de maximizar el derecho de acceso a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva del impugnante y, con fundamento en los artículos 1o. y 17 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, se ordena remitir el escrito de expresión de agravios y las pruebas documentales ofrecidas en éste al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, a fin de que dicho órgano jurisdiccional electoral determine lo que en derecho corresponda.

Como apoyo de lo anterior, se cita el contenido de la jurisprudencia 12/2004 de rubro: «*Medio de impugnación local o federal. Posibilidad de reencauzarlo a través de la vía idónea.*»⁷, que atañe precisamente a la posibilidad de hacer extensivo el acceso a la justicia, puesto que la elección o designación de la vía equivocada no determina necesariamente la improcedencia del medio de impugnación.

Por tanto, se ordena remitir el recurso promovido al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, sin prejuzgar sobre su procedencia, pues acorde con la diversa jurisprudencia 9/2021 de rubro: «*Reencauzamiento. El análisis de la procedencia del medio de impugnación corresponde a la autoridad u órgano competente.*»⁸, tal pronunciamiento corresponde al órgano jurisdiccional, al ser la autoridad competente para tal efecto, como se señaló en supralíneas.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base VI, y 116, fracción IV, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 31 de la *Constitución Política del Estado de Guanajuato*, 392, de la *ley electoral local*, y 121 del *Reglamento de sesiones*, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato:

⁷ Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 173 y 174.

⁸ Jurisprudencia 9/2021. Quinta Época. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 5. Número 10. 2012. Páginas 34 y 35.

RESUELVE:

Primero. Es improcedente el recurso de revocación, en términos de lo establecido en el punto **IV** del presente acuerdo.

Segundo. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva que, mediante oficio, remita al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato el escrito de expresión de agravios suscrito por José Manuel Aguilar Jasso y sus anexos, para los efectos precisados en el punto **V** de este acuerdo.

Tercero. Notifíquese personalmente a José Manuel Aguilar Jasso, en el domicilio que señaló para recibir notificaciones en el escrito mediante el cual interpuso el recurso de revocación que motiva la emisión de este acuerdo, en términos de los artículos 406 y 407 de la *ley electoral local*.

Así lo resolvió el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato por mayoría de votos de las consejeras electorales Brenda Canchola Elizarraraz, María Concepción Esther Aboites Sámano, Nora Maricela García Huitrón y Sandra Liliana Prieto de León, así como de los consejeros electorales Antonio Ortiz Hernández y Luis Gabriel Mota; y con el voto en contra de la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero, en la sesión extraordinaria del catorce de septiembre de dos mil veintidós.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la *ley electoral local*, firman este acuerdo la presidenta del Consejo General y la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.